**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
SALA CIVIL - FAMILIA**

MAGISTRADO PONENTE	: PABLO IGNACIO VILLATE MONROY.
CLASE PROCESO	: EJECUTIVO
DEMANDANTE	: BANCOLOMBIA S.A
DEMANDADO	: DISTRIBUIDORA PECUARIA DEL ORIENTE LTDA.
RADICACIÓN	: 25151-31-03-001-2020-00041-01
DECISIÓN	: CONFIRMA AUTO APELADO

Bogotá D.C., veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandada a través de su apoderado, contra proveído de fecha 27 de mayo de 2022, dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza (Cund.), a través del cual negó la nulidad solicitada dicha parte.

I. ANTECEDENTES:

1. La parte demandada a través de su apoderada, solicitó la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso, alegando para ello la indebida notificación del auto que libró mandamiento de pago e invocando la causal establecida en el numeral 8° del artículo 133 C.G.P., argumentando que la sociedad tiene como correo electrónico distribuidorapecuariadelorient@gmail.com, el cual fue hackeado hace un año y que de este evento tenía conocimiento BANCOLOMBIA S.A., aportando como prueba, fotos extraídas de información solicitada en google y copia de los correos remitidos por la entidad financiera (archivo 08 C-2).

2. A dicha solicitud se opuso el banco demandante indicando que la nulidad resulta improcedente y carente de sustento, pues la demanda se presentó el 1° de diciembre de 2020, en vigencia del Decreto 806 de 2020, con resultado positivo, pues el sistema de notificación del banco Domina certificó el 16 de junio de 2021 “acuse recibido” (archivo 13 C-2).
3. En el auto motivo de apelación, vale decir, del 27 de mayo de 2022 (archivo 16 C-2) la señora Juez de primer nivel negó la nulidad solicitada, argumentando que a folio 238 del expediente principal, la parte actora efectuó la notificación al correo electrónico suministrado en la demanda, mismo relacionado por la parte pasiva como su dirección electrónica de notificaciones judiciales en la Cámara de Comercio, dando cumplimiento al artículo 8° del Decreto 806 de 2020; que además acreditó el acuse de recibo de tal notificación, por parte de la empresa DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S., como lo establece el inciso 3° de la citada norma; que en cuanto a que su correo fue hackeado hace un año, la demandada tuvo todo ese tiempo para cambiar la dirección electrónica para notificaciones judiciales en la Cámara de Comercio, pero como no lo hizo y conforme al certificado aportado en mayo de 2022, continua vigente, asumió el riesgo de que la siguieran notificando a la misma dirección y su incuria no le puede ser imputada a la parte actora.
4. Inconforme con la decisión, la parte demandada a través de su apoderada, formuló recursos de reposición y en subsidio de apelación (archivo 18 C-2), argumentando que se ha violado el debido proceso y el derecho al trato igual de las partes, dado que la parte demandante descorrió el traslado de la nulidad de manera extemporánea ya que el término concedido finalizó el 16 de mayo de 2022, y la parte demandante remitió copia del escrito el 18 de mayo del 2022; que de manera extraña el juzgado tuvo en cuenta lo alegado por el banco demandante; que la parte demandada no tiene acceso al link del proceso y por lo tanto, no se tiene conocimiento de cuál es el correo electrónico, por lo que le ha tocado basarse en suposiciones para alegar la falta de notificación personal, la cual han declarado bajo la gravedad de juramento que no se ha realizado acorde con la ley; que no se enteró de lo actuado, tal y como lo indica la normatividad; que se demostró al Despacho, que la entidad financiera demandante, se comunicó a través de correo electrónico con la demandada al correo albeiroagudelo@gmail.com y que a través del otro correo electrónico nunca ha existido ningún tipo de comunicación, o sea que hay mala fe en el actuar de la contraparte.

5. Mediante auto del 17 de junio de 2022 (archivo 23 C-2), el juzgado negó la reposición de la providencia recurrida, señalando que con independencia de lo dicho por el ejecutante, lo considerado en el auto recurrido es un tema que se impone objetivamente de la revisión del expediente y del artículo 8 del Decreto 806 de 2020, que conforme al certificado de la Cámara de Comercio que obra en autos, se advierte que el correo al cual se remitió la notificación judicial pertenece a la demandada; que si el correo había sido hackeado, la parte demandada debió acreditar ese hecho ante este despacho con la prueba idónea de que le sucedió tal evento; que el 7 de junio de 2022 juzgado por medio de correo electrónico, a petición de la apoderada de la parte demandada, le compartió la carpeta del expediente virtual, tal y como consta en el folio 51 del cuaderno principal del expediente virtual. Negada la reposición, se concedió el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONES:

Las nulidades procesales fueron instituidas dentro del ordenamiento procesal civil colombiano, con la única finalidad de preservar el equilibrio procesal y garantizar el principio constitucional del Debido Proceso, pues a través de ellas es posible evitar el caos jurídico y el desorden en el desarrollo de las diversas clases de procesos.

Precisamente, en aras de preservar las nulidades como mecanismo para corregir los yerros procesales y evitar que ellas a la postre se tornen en otro instrumento más de desorden e incertidumbre, estos medios de solución se enmarcan con todo rigor dentro del principio de taxatividad, porque su campo de aplicación se encuentra claramente delimitado y sólo son capaces de hacer nulo todo o parte del proceso, aquéllas que expresamente determina la ley, es decir, no puede existir nulidad sin norma legal que la consagre.

Emerge este principio de especificidad o taxatividad y por ende tiene su fuente legal, en lo dispuesto por el inciso primero del artículo 133 del Código general del Proceso que advierte que *"El proceso es nulo en todo en parte, solamente en los siguientes casos..."*

Por su parte el inciso final del artículo 29 de la Carta Magna, dispone que: *"Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso"*. Ello implica que el precepto constitucional autoriza una nueva modalidad de nulidad referida a la prueba obtenida con violación del debido proceso. Sin embargo, en sana interpretación de este precepto, es de entender que la nulidad de *"pleno derecho"* solo se predica de la *"prueba obtenida con violación del debido proceso"*, más no del proceso como tal.

En el asunto de que se trata, se plantea por la demandada como causal de nulidad la establecida en el numeral 8° del artículo 133 del C.G.P., argumentando que hubo indebida notificación de la sociedad demandada porque la notificación se surtió a través de un correo personal que no es el suyo.

El derecho de defensa y el del debido proceso solo se garantizan en cuanto el demandado tenga cabal conocimiento de los hechos y pretensiones que en su contra se han propuesto, garantía fundamental que encuentra plena satisfacción mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, según se trate, habilitándolo para ejercer el derecho de contradicción, mediante el cual puede hacer valer sus derechos tanto sustanciales como procesales.

Por ello, de manera reiterada y uniforme se ha expresado que *"Es así como la notificación de las providencias judiciales constituye una premisa fundamental del debido proceso judicial, pues 'es el acto material de*

comunicación por medio del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos de particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. La notificación tiene como finalidad garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación administrativa y de su desarrollo, de manera que se garanticen los principios de publicidad, de contradicción y, en especial, de que se prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído. Las notificaciones permiten que materialmente sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea oponiéndose a los actos de la contraparte o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del término que la ley disponga para su ejecutoria¹. Por consiguiente, la ausencia de notificación de las providencias judiciales podría generar violación del derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia...”²

Al tenor de lo previsto por el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público, es motivo de anulación del proceso, en el entendido de que dicho acto, sin duda, constituye el punto de partida para el efectivo ejercicio del derecho de defensa por su parte y de que, por lo tanto, toda deficiencia que de manera importante impida o desfigure ese conocimiento de haber sido convocado a un proceso judicial, afecta significativamente el derecho al debido proceso.

¹ Sentencia T-165 de 2001.

² Corte Constitucional, Sentencia T-489 de 29 de junio de 2006, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

En consecuencia, teniendo en cuenta la importancia de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cual es la de garantizar al demandado el derecho de defensa, los trámites que deben realizarse para efectuar la referida notificación se encuentran rigurosa y minuciosamente regulados en los artículos 291 a 293 del Código General del Proceso, normas de las que se concluye que la notificación de tales providencias debe hacerse directamente al demandado y sólo cuando ello no es posible, procede la notificación subsidiaria, la cual se cumple a través del curador ad litem que se designe al demandado, previo el agotamiento de los trámites del emplazamiento legalmente previstos.

Por consiguiente, cualquier irregularidad en que se incurra para comunicar al demandado las mentadas decisiones, o en los trámites del emplazamiento, vicia de nulidad la actuación procesal subsiguiente, en la medida que vulnera de manera ostensible el derecho de defensa.

Ahora bien; en punto al tema es de recordar que Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020, vigente para la época en que se cumplió la notificación a la incidentante en el presente caso, instituyó medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, para lo cual en sus consideraciones determinó *“Que los jueces utilizarán preferencialmente los medios tecnológicos para todas las actuaciones, comunicaciones, notificaciones, audiencias y diligencias, y permitirán a las partes, abogados, terceros e intervinientes actuar en los procesos mediante los medios tecnológicos disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades físicas innecesarias”, ... “Que los medios tecnológicos se utilizarán para todas las actuaciones judiciales, como presentación de la demanda, contestación de la*

demanda, audiencias, notificaciones, traslados, alegatos, entre otras”, entre varias otras consideraciones”.

Con base en ello dispuso en su artículo 8º:

“Artículo 8. NOTIFICACIONES PERSONALES. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.

Del texto de la norma se infiere que el mensaje de datos enviado a la dirección electrónica, es un medio de notificación válido en nuestro sistema procesal con ocasión de la expedición del mencionado decreto, notificación personal que se entenderá surtida ***“transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”***, norma que fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en sentencia C-420 del 24 de septiembre de 2020, M.P. Dr. Richard S. Ramírez Grisales ***“...en el entendido de que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.”***

Vuelta la mirada al asunto que se resuelve, desde el umbral se advierte la improcedencia de acceder a la nulidad que se reclama, dado que los hechos que se alegan, no estructuran la causal que se invoca, vale decir, la indebida notificación, como quiera que en la demanda se indicó como dirección electrónica de la sociedad demandada “distribuidorapecuariadelorient@gmail.com” dirección que corresponde a la indicada en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, como de la sociedad DISTRIBUIDORA PECUARIA DEL ORIENTE LTDA., aportado con la demanda (archivo 01 C-1 Fls. 92 y 210), dirección a la que se envió la notificación del auto de mandamiento de pago y se acusó recibo conforme a la constancia visible en el archivo 19 del expediente digital, expedida por la empresa Domina Entrega Total S.A.S., que da cuenta del envío y entrega de la notificación al correo electrónico de la sociedad demandada.

No negó la demandada ser la titular del correo electrónico de marras, ni corresponder al indicado en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá; tampoco alegó ni demostró, que la notificación se envió a correo diferente o que no lo recibió, razón por la cual no existe fundamento para considerar que se incurrió en la indebida notificación que se alega, caso en el cual, la constancia expedida por la mencionada empresa, comporta plenos efectos como prueba del debido enteramiento a la parte demandada del mandamiento de pago librado en su contra dentro del presente litigio, sin que haya fundamento alguno fáctico ni jurídico para desestimarla como tal.

Ahora bien; se plantea por la demandada que su correo fue hackeado y que por ello se configuró la causal de nulidad; no obstante, no se probó idóneamente que ciertamente el correo electrónico de la demanda sufrió tal ataque informático; que no tuvo acceso a ese medio tecnológico y que por ello

no tuvo acceso a la notificación. No basta pues, la mera afirmación de la demandada para dar por probado tal hecho de no haber sido notificada por las razones que expuso.

Además, si bien es cierto se alegó hackeo al correo electrónico desde hace más de un año antes de la presentación del incidente, no resulta razonable que examinado el certificado de cámara de comercio aportado con la petición de nulidad, expedido el 28 de abril de 2022 (archivo 02 C-2 Fl. 1), la dirección electrónica allí atestada, sea la misma a la que se envió la notificación del mandamiento de pago el 16 de junio de 2021 (archivo 19 C-1), vale decir, `distribuidorapecuariadelorient@gmail.com`, todo lo cual desdice de la veracidad de la indebida notificación que pregona la apelante, pues no es razonable que estando presuntamente afectado el uso del correo, no hayo sido modificado a fin de asegurar el debido enteramiento de las notificaciones judiciales y de las actuaciones que atañen al ente societario.

Así pues, no acreditada la causal de nulidad alegada por la gestora del recurso vertical que se resuelve, la decisión motivo de censura será confirmada, condenando a la apelante en costas por el trámite del recurso.

III. DECISIÓN:

Congruente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado esto es, el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza, el día 27 de mayo de 2022.

SEGUNDO: Condenar a la sociedad apelante en costas por el trámite del recurso. Líquidense por el juzgado de primera instancia, con base en la suma de \$1.000.000, como agencias en derecho..

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PABLO IGNACIO VILLATE MONROY

Magistrado

Firmado Por:
Pablo Ignacio Villate Monroy
Magistrado
Sala Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **520cbb61ad99aa949d22bfd4c39ef7007bc3f56e0e5f4f98e15aa2d4f51d25f5**

Documento generado en 25/11/2022 12:14:06 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>